

Editorial

Coordinación política para dar certezas a los damnificados

La emergencia que vive la comuna de Penco tras los incendios forestales iniciados el 17 de enero tiene datos devastadores. Con 3.279 familias catastradas, es decir, el 76% del total de damnificados, la magnitud del impacto obliga a una conducción clara, coordinada y, sobre todo, coherente. Sin embargo, lo que hoy se proyecta hacia la comunidad es una preocupante superposición de anuncios que, lejos de otorgar certezas, profundiza la confusión.

Por una parte, el actual gobierno, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha destacado avances concretos, como son el pago de bonos de acogida, entrega del bono de autoconstrucción a más de 1.600 familias y la firma de una resolución que habilita la demolición de 54 blocks en Ríos de Chile, declarados inhabitables tras los estudios técnicos. Se habla de asignaciones directas de subsidios, de planificación de demoliciones y de medidas de traslado transitorio.

En paralelo, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien asumirá el 11 de marzo como integrante del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, ha visitado la zona y planteado la instalación de villas provisionales y procesos de relocalización parcial en sectores donde no es posible reconstruir en el mismo lugar. Incluso, en su última visita esta semana aseguró que no existirán "familias inhábiles" en el proceso de reconstrucción y que su administración se hará cargo desde el día en que asuma.

Queda claro entonces que la intención de apoyar a quienes de manera literal lo perdieron todo existe, está presente en las actuales y futuras autoridades, pero el problema radica en la coexistencia de caminos que no aparecen suficientemente integrados en una hoja de ruta común.

En sectores como Ríos de Chile, Villa Miramar, Vipla o GeoChile, la palabra que más se escucha es incertidumbre. Familias que llevan años esperando una vivienda formal hoy enfrentan la demolición de sus departamentos sin tener claridad plena sobre su destino transitorio ni definitivo. Muchos optan por el bono de autoconstrucción, otros esperan una eventual villa de emergencia, otros simplemente resisten la salida porque no cuentan con una alternativa concreta. Mientras tanto, el tiempo pasa y a cuatro semanas del megaincendio que se llevó sus hogares hay vecinos viviendo en carpas o albergues, con adultos mayores y niños expuestos al frío y la lluvia que este mes ha complicado la situación.

Es importante tener presente que las transiciones de gobierno son procesos institucionales normales, pero que cuando coinciden con una emergencia de esta magnitud, la responsabilidad política no disminuye sino que se duplica. Para quienes han perdido su hogar, no existe la distinción entre "autoridades salientes" y "autoridades entrantes", solo existe el Estado, y ese Estado debe hablar con una sola voz.

No se trata de uniformar visiones ni de dejar fuera propuestas de manera apresurada. Sólo se trata de coordinar antes de anunciar y en lo posible acordar cronogramas antes de generar expectativas, con el fin de asegurar continuidad presupuestaria y técnica antes de introducir ajustes públicos que puedan interpretarse como rectificaciones o cambios de rumbo.

Cada anuncio paralelo abre preguntas en la comunidad afectada y es importante que quienes tienen el poder de decisión actual no evadan esa responsabilidad. Las dudas paralizan decisiones urgentes y retrasan procesos que no admiten dilaciones, los que podrían tener mayor solidez si además son, al menos, coordinados.

Nuestro país y nuestra querida Región del Biobío tiene experiencia en reconstrucción post catástrofes y ha aprendido que las primeras semanas son decisivas. El tiempo administrativo puede parecer breve desde los escritorios, pero en terreno se mide en

noches bajo techo precario y en días sin servicios básicos plenamente restablecidos, como lo han relatado recientemente los propios damnificados. Perder semanas por falta de alineamiento político es un lujo que Penco no puede permitirse.

Hoy más que nunca se requiere sentido de urgencia y vocación de bien común, lo que implica sentar en una misma mesa al gobierno actual y al entrante, concordar un plan único de reconstrucción para la comuna junto a la municipalidad y comunicarlo de manera conjunta, con fechas claras, responsables identificables y etapas definidas. Implica, también, garantizar que los subsidios, demoliciones y eventuales villas transitorias formen parte de un diseño integral y no de soluciones que compiten entre sí.

La comunidad ya ha hecho su parte al organizarse, levantar información, exigir respuestas y, en muchos casos, comenzar a reconstruir con sus propias manos. Ahora corresponde que la institucionalidad esté a la altura y que en momentos de catástrofe, la política no se convierta en un factor de ruido.

Para quienes han perdido su hogar, no existe la distinción entre "autoridades salientes" y "autoridades entrantes", solo existe el Estado, y ese Estado debe hablar con una sola voz.